Señores.

**JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE PASTO**

[j03prpcpas@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j03prpcpas@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

|  |  |
| --- | --- |
| **REFERENCIA:** | PROCESO VERBAL |
| **RADICADO:** | 52001-4189-003-2022-00495-00 |
| **DEMANDANTES:** | ILIA MARÍA ROMERO ROSALES |
| **DEMANDADOS:** | FLOTA MAGDALENA S.A. Y OTROS |
| **LLAMADO EN GARANTÍA:** | AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. |

**ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.**, sociedad anónima de seguros, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, identificada conNIT 860.002.186-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por la Dra. MYRIAM MARTÍNEZ SUANCHA, como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto comedidamente que procedo en primer lugar a **CONTESTAR LA DEMANDA** formulada por la señora ILIA MARÍA ROMERO ROSALES, y en segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por la demandada FLOTA MAGDALENA S.A., en contra de mi mandante, anunciando desde ahora que me opongo a la totalidad de las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

# CAPÍTULO I

# CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

# FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA

**FRENTE AL HECHO 1:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el extremo actor, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por no estar relacionadas con el objeto del giro ordinario de sus negocios. En todo caso, dentro de las pruebas documentales de la demanda se observa un certificado de atención médica para víctimas de accidente de tránsito expedido por la IPS Fundación Hospital San Pedro, el cual da cuenta que la demandante ILIA ROMERA ROSALES, fue atendida en dicho centro hospitalario el día 05 de septiembre de 2014, y en el breve relato de los hechos se señala *“Paciente* ***en calidad de pasajera*** *de bus de transporte público sufre accidente de tránsito al parecer por fallas mecánicas”.*

**FRENTE AL HECHO 2:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el extremo actor, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por no estar relacionadas con el objeto del giro ordinario de sus negocios, por ende, la parte accionante debe probar su dicho, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 167 del C.G.P. En todo caso, en el certificado de atención médica al que hace referencia la demandante si bien se hace referencia al sitio de ocurrencia del accidente de tránsito, no se hace ninguna mención respecto a quien conducía el vehículo.

**FRENTE AL HECHO 3:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el extremo actor, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por no estar relacionadas con el objeto del giro ordinario de sus negocios.

**FRENTE AL HECHO 4:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el extremo actor, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por no estar relacionadas con el objeto del giro ordinario de sus negocios, por ende, la parte accionante debe probar su dicho, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 167 del CGP.

**FRENTE AL HECHO 5:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el extremo actor, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por no estar relacionadas con el objeto del giro ordinario de sus negocios, por ende, deberán probar su dicho, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 167 del C.G..P.

**FRENTE AL HECHO 6:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el extremo actor, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas, por ende, la parte accionante debe probar su dicho, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 167 del C.G.P. Sin embargo, desde ya formulo férrea oposición frente a este hecho pues lo dicho en este hecho no es corroborado ni se puede constatar en ninguna de las pruebas que fueron aportadas por la parte accionante con la demandante, luego entonces, las afirmaciones que contiene este hecho de la demanda son sumamente temerarias

**FRENTE AL HECHO 7:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el extremo actor, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por no estar relacionadas con el objeto del giro ordinario de sus negocios, y porque corresponde con un aspecto de la vida personal de la señora ILIA MARÍA ROMERO ROSALES, por ende, deberán probar su dicho, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 167 del C.G.P.

**FRENTE AL HECHO 8:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el extremo actor, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por corresponder a la esfera personal de los demandantes, de ahí que deberán probar su dicho a través de los medios conducentes, pertinentes y útiles.

**FRENTE AL HECHO 9:** Es cierto.

# FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 1**: **ME OPONGO** a esta pretensión elevada por la parte demandante debido a que la misma no tiene vocación de prosperidad. Lo anterior, toda vez que no es jurídicamente admisible declarar la referida responsabilidad ante la **Inexistencia de nexo causal**. Lo anterior, pues en el presente asunto no se encuentran acreditados los presupuestos axiales de la responsabilidad civil puesto que los medios probatorios allegados por el extremo actor carecen de virtualidad para la declaratoria de responsabilidad debido a que, (i) no está debidamente acreditada la calidad de la señora ILIA MARÍA ROMERA ROSALES como pasajera del vehículo de palcas UPU-375, (ii) dentro de las pruebas de la demanda no se cuenta con medios de conocimiento que den cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente del tránsito del cual se desprenderían el daño que alega haber sufrido la demandante, y por tanto, no puede hablarse de que exista prueba de un nexo causal entre dicho hecho y los perjuicios cuya reparación reclama la demandante, y (iii) en este mismo orden de ideas, en el acervo probatorio no se observa medios que acrediten la existencia y cuantía de los perjuicios afirman padecer las aquí demandantes, tal como se precisará en líneas posteriores.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 2: ME OPONGO** a esta pretensión, pues, consecuencia del fracaso de la anterior pretensión, no habrá lugar a que se condene a los demandados al reconocimiento o pago de ninguna cifra de dinero en favor de la demandante ILIA MARÍA ROMERO ROSALES, en tanto que, como ya se explicó, esta no ha cumplido con la carga de probar que en el presente asunto se han configurado los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “PERJUICIOS MATERIALES”:** Me opongo al reconocimiento de cualquier indemnización por este concepto, en tanto que, en primer lugar, como ya se relacionó en el presente escrito, la parte demandante no ha acreditado en el presente asunto los elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual; aunado a ello, la parte demandante no explica en la demanda si estos perjuicios materiales que alega son a título de lucro cesante o daño emergente; tampoco acredita con los documentos allegados con la demanda la supuesta actividad económica que desempeñaba la señora ILIA MARÍA ROMERA ROSALES, y los ingresos que devengaba; y finalmente, tampoco explica o aclara el tiempo por el cual habría dejado de percibir estos ingresos, o en sobre que gastos realizados justifica la suma solicitada, por todo lo anterior esta pretensión debe ser desestimada.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “PERJUICIOS INMATERIALES MORALES”:** Me opongo al reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte Demandante por cuanto: (i) no se vislumbra la existencia de un daño supuestamente gravoso para solicitar en favor de la demandante la exorbitante suma de $95.408120, ; (ii) dicha tasación propuesta es equivocada y no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, por cuanto solo en los casos más graves con lesiones que comportan incluso la dependencia total de la víctima, o incluso la muerte de un pariente cercano, se ha reconocido como máximo la suma de $60.000.000, situación que no se equipara a la del asunto de marras, o que en todo caso no ha sido debidamente acreditada por la parte actora. Aunado a lo anterior, sobre la liquidación o tasación de este clase de perjuicio no procede la actualización solicitada por la parte demandante.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN “DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN”:** Me opongo al reconocimiento de este concepto porque en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, no pueden ni deben ser indemnizados el supuesto daño a la vida de relación ya que, su presunta causación no se encuentra debidamente probada puesto que no hay prueba suficiente más que el dicho de la demandante, sobre la presunta alteración en sus condiciones de vida, así mismo, no obra en el plenario una prueba que dé cuenta de las secuelas o consecuencias que arrastre hasta el día de hoy la señora ILIA MARÍA ROMERA ROSALES, como resultado del accidente ocurrido el 05 de septiembre de 2014, además no se ha acreditado cuales actividades de esparcimiento ya no puede realizar y la razón objetiva del impedimento de realizarlas. Aunado a lo anterior, sobre la liquidación o tasación de este clase de perjuicio no procede la actualización solicitada por la parte demandante.

# OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

En los términos del artículo 206 del Código General del Proceso, el suscrito apoderado se permite formular objeción frente al juramento estimatorio que se encuentra en la demandan, esto en tanto que, la parte demandante no explica ni sustenta de ninguna manera la cifra que se incluye en el juramento estimatorio, es decir, no existe ninguna operación aritmética, o respaldo documental que permita inferir o entender razonablemente como la parte actora llegó a la cifra estimada en el juramento; por lo tanto, la objeción que se hace frente al mismo es por su falta de pruebas, y sustento.

# EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE A LA DEMANDA

La defensa de mi representada se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho y los perjuicios alegados, y posteriormente, se abordarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formulan las siguientes excepciones:

# A. EXCEPCIONES DE FONDO RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD POR EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y LOS PERJUICIOS ALEGADOS

## PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE TRANSPORTE

Al interior del presente trámite es claro que se ha configurado la prescripción de las acciones derivadas del contrato de transporte, como quiera que de conformidad con el artículo 993 del Código de Comercio a partir del momento en que termina la obligación de conducción se cuenta con un término bienal a fin de que se inicien acciones en virtud de tal vinculo contractual, no obstante, en el caso de marras el accidente de tránsito acaeció el 05 de septiembre de 2014, y la demanda de Responsabilidad Civil Extracontractual y las acciones en contra del asegurado se promovieron tan solo hasta el año 2022 siendo clara la configuración de la alegada prescripción.

Ahora, si bien es cierto, el 25 de julio de 2017 se presentó la solicitud de conciliación y el **término de prescripción se reanudó el 02 de octubre de 2017**, calenda en la cual se expidió la constancia de no acuerdo, es de aclarar en primer lugar que incluso para la fecha en la cual se presentó la solicitud de conciliación, ya se habría configurado el fenómeno jurídico de la caducidad de las acciones del contrato de transporte, pues los hechos materia de litigio ocurrieron el 05 de septiembre de 2014, y por tanto, la solicitud de conciliación se debió presentar para efectos de suspender el término de prescripción a más tardar el 06 de septiembre de 2016.

Sobre este último punto, sobre lo cual se memora que el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 es claro al indicar que la solicitud de conciliación suspende- no interrumpe- el término de prescripción hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley, o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de dicha ley, o hasta que se veza el termino de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero, siendo en este caso lo que ocurrió primero fue la expedición de la constancia de no acuerdo.

Con relación a la prescripción de las acciones derivadas del contrato de transporte, el artículo 993 del Código de Comercio establece:

*“(…) Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato de* ***transporte prescriben en dos años.***

***El término de prescripción correrá desde el día en que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción.***

*Este término no puede ser modificado por las partes (…)” (Negrilla y subrayado fuera del texto original).*

Los hitos temporales en este caso son:

1. El accidente de tránsito que suscitó el litigo en cuestión acaeció el **05 de septiembre de 2014.**
2. El 25 de julio de 2017 se presentó la solicitud de conciliación y el **término de prescripción se reanudó el 02 de octubre de 2017**, calenda en la cual se expidió la constancia de no acuerdo, sobre lo cual se memora que el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 es claro al indicar que la solicitud de conciliación suspende- no interrumpe- el término de prescripción hasta la fecha en la cual se expidan las constancias relativas al trámite conciliatorio. Es de indicar que incluso cuando se radicó esta solicitud de conciliación ya se había configurado el mencionado termino de prescripción.
3. El escrito de demanda se radicó el **23 de agosto de 2022**, con posterioridad al término bienal establecido en el artículo 993 del Código de Comercio, luego entonces, resulta claro que operó la prescripción que aquí se alega.

Ahora bien, la presente acción se propone pues si bien en el encabezado de su acción la parte demandante indica que se trata de una acción de responsabilidad civil extracontractual, de la narración que hace los hechos y en especial del hecho primero, en el cual confiesa la parte demandante que era pasajera del vehículo de placas UFU-375, de lo cual también dan cuenta las pruebas documentales que obra en el plenario, es claro que lo que realmente persigue la parte actora es una responsabilidad de carácter contractual, derivada precisamente de la existencia de un contrato de transporte entre la señora ILIA MARÍA ROMERO ROSALES y FLOTA MAGDALENA S.A..

Por tanto, es evidente entonces que en este caso operó la prescripción de las acciones derivadas del contrato de transporte. Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

## INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

Se formula esta excepción teniendo en cuenta que, en el proceso de la referencia, la parte demandante no cuenta con medios probatorios que prueben la responsabilidad civil del conductor del vehículo de placas UFU-375, el señor CARLOS ARTURO CHAPARRO CHAPARRO, el cual, para la fecha de los hechos, esto es, el 05 de septiembre de 2014 se encontraba afiliado a FLOTA MAGDALENA S.A., y cubría la ruta entre la ciudad de Pasto – Nariño y Cali – Valle del Cauca.

Por lo anterior, Las pretensiones carecen de fundamento, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza de los demandados, y por ende de mi representada, ya que en la esfera de la responsabilidad civil implorada no se constituyen los elementos necesarios para que la misma sea predicada (daño, conducta reprochable desplegada por la parte pasiva y nexo de causalidad), bien sea a título de responsabilidad contractual, que es el que corresponde por tener la acción su origen en un contrato de transporte, o a título extracontractual como lo plantea la parte demandante en su escrito de demanda, hay que señalar que es inexistente nexo alguno de causalidad que permita edificar cualquiera de estos cargos.

Es más, en el presente asunto es notoria la falta de elementos de conocimiento que acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que presuntamente se habría presentado el accidente que asevera la parte demandante tuvo lugar el día 05 de septiembre de 2014; las únicas pruebas que podrían apuntar en esta dirección con el certificado de atención médica y para víctimas de accidente de tránsito emitido por la Fundación Hospital San Pedro, y la epicrisis emitida por el mismo centro asistencial, pruebas que, si bien darían cuenta de un presunto accidente vial, no así lo hacen frente a las causas del mismo.

Similar caso con la documentación que está relacionada con el expediente penal, a saber, la solicitud de análisis de EMP y EF, y el informe pericial de clínica forense, pues estos elementos, tampoco pueden dar cuenta de las circunstancias que se llevaron a la producción del accidente de tránsito, ni pueden arrojar indicios respecto de quien sería el presunto responsable.

En conclusión, como quiera que en el sub examine, la parte demandante pretense atribuir responsabilidad civil derivada de un contrato de transporte, debía de allegar al proceso elementos de conocimiento que acreditaran los diferentes elementos estructurales de esta institución jurídica, tales como el daño y el nexo causal, sin embargo, no existen tales elementos dentro del proceso, razón por la cual, no puede imputarse responsabilidad civil a los demandados, y por tanto, las pretensiones de la demanda deben ser negadas.

## INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL.

Se formula el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al Despacho que en el caso objeto de estudio no es dable declarar la responsabilidad civil que pretende endilgar la parte actora toda por cuanto la ausencia de medios probatorios que acrediten el hecho dañoso, necesariamente se traduce en la inexistencia de la inferencia lógica que une la conducta desplegada por la pasiva con el supuesto daño padecido por la demandante, siendo este último un elemento fundante de la responsabilidad civil.

La relación de causalidad es un requisito sine qua non para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Como acotamos anteriormente, este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas.

El estado del arte actual ha acogido la teoría de la causalidad adecuada, la cual indica que un hecho es causa de una consecuencia cuando la producción de esta le sea atribuible de conformidad con las reglas de la experiencia[[1]](#footnote-1). En resumidas cuentas, es un estudio de idoneidad del hecho para producir la consecuencia, que en materia de responsabilidad civil hace referencia al daño. La Corte Suprema de Justicia ha acogido esta teoría y la define de la siguiente manera:

*“Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil”[[2]](#footnote-2)*

Debe igualmente resaltarse que la jurisprudencia ha utilizado como método para identificar la causa eficiente del daño, “***la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, solo es causa del resultado, aquella conducta que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo****, (…) según esta teoría, solo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo.* ***Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante***”[[3]](#footnote-3)

Así, es manifiesto el examen de causalidad consiste en un estudio de orden fáctico, acerca de la idoneidad de un hecho para ser considerado jurídicamente causal de la producción de un daño, o, en otras palabras, el hecho está sujeto a la verificación material y probatoria de su idoneidad para ser considerado bajo el concepto jurídico de causa.

El referido examen de causalidad, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, para que se posible declarar responsabilidad civil extracontractual es requisito necesario e ineludible que exista y se encuentre probado el nexo causal entre el hecho que se alega y el daño cuya indemnización se solicita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“****En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización.*** *El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización…”. (Se resalta). Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible. […][[4]](#footnote-4)”*

Para esta etapa procesal no se encuentra probada la existencia de responsabilidad civil que pueda estructurarse e imputarse a los codemandados y consecuentemente, a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., en razón a que no están acreditadas las circunstancias modales y tempo-especiales del hecho de tránsito. En consecuencia, al no existir criterio material o normativo de imputación del daño a las aquí codemandadas, es forzosa la denegatoria de las pretensiones de la demanda

Solicito a señor Juez declarar probada esta excepción.

## IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE

En el caso objeto de estudio no es procedente el reconocimiento de perjuicios a título de lucro cesante consolidado toda vez que, la señora Ilia María Romero Rosales no certifica que se encontraba laborando para el momento en que acaeció el accidente de tránsito, ya que no allega prueba de esta afirmación, así como tampoco se encuentra acreditado el cese laboral de la señora Romero Rosales. Se pasa entonces a explicar de manera más detallada la improcedencia del reconocimiento del lucro cesante solicitado por la demandante:

*8.2. Improcedencia del lucro cesante consolidado*

Al tenor de lo ya expresado, resulta improcedente reconocer perjuicio alguno a título de lucro cesante consolidado toda vez que, para ello es necesario demostrar de forma inequívoca que la víctima directa, en este caso, la señora Ilia María Romero Rosales, devengaba algún emolumento como secuencia del ejercicio de alguna actividad económica. En ese sentido, al no existir prueba de que la víctima tuviera un ingreso que perdió como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente, mismo que como ya se ha dicho tampoco está acreditado, no es procedente conceder suma alguna a título de lucro cesante consolidado.

Para empezar, debe hacerse remembranza sobre los aspectos fundamentales que configuran el lucro cesante. Éste se ha entendido cómo una categoría de perjuicio material, de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

Para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

**“(…)** *en cuanto perjuicio,* ***el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual.*** *(…) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente (…)*

*Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que* ***conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (…)****.”[[5]](#footnote-5)*(Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Para el caso concreto, aun cuando en los hechos de la demanda se alega que previó a la ocurrencia del hecho de tránsito, la señora Romero Rosales trabajaba como comerciante de víveres de manera independiente, de ello no se allega al proceso ninguna constancia, así como tampoco se acredita que esta haya dejado de percibir un ingreso por los hechos materia de litigio.

En conclusión, como quiera que la parte demandante no acredita el ingreso que percibía antes de que acaeciera el accidente no es procedente el reconocimiento de lucro cesante consolidado pues no hay certeza de la cuantía a indemnizar. En consecuencia, no hay lugar a que el Despacho proceda con el reconocimiento de indemnización a título de lucro cesante consolidado en favor de la demandante. Lo anterior, habida cuenta que por no encontrarse probado un factor determinante para el reconocimiento de esta tipología de perjuicios, su reconocimiento es a todas luces improcedente por ausencia de pruebas que acrediten que la víctima dejó de percibir su salario o un redito alguno y que como consecuencia del accidente haya quedado cesante laboralmente, elemento de vital importancia para la eventual tasación de esta tipología de perjuicio. En ese sentido, es claro que las pretensiones encaminadas a obtener un reconocimiento por el concepto de Lucro cesante, no está llamada a prosperar, puesto que no siguen los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual del lucro cesante.

Por todo lo anterior, solicito señor juez tener por probada esta excepción.

## IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO Y TASACIÓN EXORBITANTE DEL DAÑO MORAL.

Sea lo primero indicar que los perjuicios extrapatrimoniales por concepto de daño moral que pretende la demandante resultan a todas luces improcedentes. Lo anterior, bajo el entendido de que la indemnización del daño moral solo procede cuando existe responsabilidad de los demandados y como quiera que en este caso no existe tal responsabilidad, claramente no hay lugar a su reconocimiento. Adicionalmente, no puede pasarse por alto que la tasación propuesta por la demandante para su reconocimiento es exorbitante y en tal virtud, no puede ser tenida en cuenta por el Despacho.

Sobre el particular, se advierte que los perjuicios extrapatrimoniales bajo la modalidad de daño moral se han solicitado por valor de $95.408.120 en favor de la señora Ilia María Romero Rosales, sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no ha tasado en esa suma el daño moral en eventos tan catastróficos como el fallecimiento o en eventos de lesiones con acreditada trascendencia como la generación de una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Aunado a la exorbitante tasación de los perjuicios realizada por la parte demandante, debe decirse que, no está debidamente acreditada la extensión o gravedad de las lesiones sufridas por la señora Romero Rosales, o que está a la fecha de contestación de la demanda presente pérdida de su capacidad laboral ni el porcentaje de este si existiere.

Los únicos elementos objetivos de juicio con los que se cuenta para tasar una eventual indemnización por daños morales son la incapacidad definitiva de 20 días emitida el 11 de febrero de 2016 en valoración médico legal practicada a la demandante, así como la deformidad física de carácter permanente; circunstancias que, en el eventual y remoto evento de que se reconozca alguna indemnización a la parte demandante, deben ser evaluada de manera objetiva y a la luz de las reglas de la sana crítica, juicio de razón que bajo ningún entendido arrojaría una indemnización estimada en valores tan altos como los solicitados en la demanda.

En este punto es importante mencionar que la Corte Suprema de Justicia a través de sus múltiples pronunciamientos, ha dejado decantados los límites máximos de reconocimiento de perjuicios, como lo es en el caso del daño moral. En tal sentido, es importante señalar que los perjuicios morales solicitados por la parte Demandante resultan equivocados y exorbitantes, puesto que siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales, los perjuicios morales en eventos de lesiones como las que supuestamente sufrió la señora Ilia María Romero Rosales, no pueden ascender a la cifra solicitada; para el efecto veamos como en un evento en donde se acreditó un 20,65% de Pérdida de Capacidad Laboral derivada de lesiones producidas en un accidente de tránsito se ordenó una suma mucho menor a la aquí pretendida:

*“(…) Tasación del daño moral para los padres, hermanas y la victima directa (menor de edad) en quince millones de pesos ( $15.000.000) cada uno, a causa de la perturbación psíquica, deformidad física permanente y perdida de su capacidad laboral en un 20,65%, de estudiante universitaria menor de edad, generadas por la colisión entre vehículo de servicio público y la motocicleta que aquella conducía (…)[[6]](#footnote-6)”*

Ahora bien, sobre este precedente citado, debe tenerse en cuenta que en ese caso si estaba acreditado el grado de pérdida de capacidad laboral de la víctima de los hechos, cosa que no ocurre en el asunto de la referencia, pues reiteramos, la demanda no se encuentra acompañada de la prueba emanada por autoridad competente y designada para tal fin que dé cuenta de la pérdida de capacidad laboral de la señora Ilia María Romero Rosales.

Según la jurisprudencia citada, es inviable el reconocimiento de los perjuicios morales en las sumas pretendidas por la Demandante. Puesto que, solicitar la suam de $95.408.120 en favor de la señora Ilia María Romero Rosales, es claramente una cifra exorbitante, lo anterior en la medida en que el baremo máximo fijado por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia corresponde a $60.000.000 en los casos más graves que implican para la víctima una situación de dependencia derivada de la parálisis corporal o incluso perdida de los órganos de los sentidos, situación que no acontece en este caso en donde ni siquiera se ha acreditado un daño, pues de los documentos aportados con la demanda, no se vislumbra algún tipo de secuela irreversible, ni tampoco obra un dictamen de pérdida de capacidad laboral que permita establecer que existe un daño desmesurado para acceder a tan cuantiosa indemnización. Como ya se dijo, tan solo se cuenta con una incapacidad médico legal de veinte (20) días, y una deformidad física, situaciones que, en el eventual caso de ser procedente, arrojarían una indemnización mucho menor a la pretendida.

En este estadio de las cosas, es necesario que el Despacho analice que la indemnización como forma de reparar en cierta medida a la víctima, no debe tener asomo de arbitrariedad, sino que debe obedecer a la evaluación de distintos factores que rodean tanto la ocurrencia del hecho, las condiciones de la propia víctima y la intensidad de las secuelas. Frente a ello es pertinente recordar los elementos que la Corte Suprema ha precisado para tal fin:

*“(…) La tasación de este tipo de perjuicios extrapatrimonial [refiriéndose al daño moral] se encuentra confiada al arbitrio del juzgador, que debe determinar en cada caso “****las condiciones personales de la víctima, apreciadas según los usos sociales, la intensidad de la lesión, la duración del perjuicio,*** *entre otras situaciones que el juez logre advertir para la determinación equitativa del monto del resarcimiento (…)”[[7]](#footnote-7) (énfasis y corchetes añadidos)*

Por lo anterior emerge con claridad que no puede considerarse antojadizo el rubro indemnizatorio toda vez que de manera clara debe valorarse cuales son las repercusiones que para la víctima comportó el presunto hecho lesivo, la temporalidad de la lesión, la temporalidad de las secuelas, la afectación emocional en desarrollo de sus actividades diarias y no puede de ninguna manera rebasar los límites indemnizatorios que a través de la jurisprudencia se han establecido, pues recuérdese que la intención de tal indemnización nunca podrá ser enriquecer a la víctima.

Frente a este tópico se hace necesario indicar como la Corte Suprema ha recordado la intención meramente indemnizatoria que reviste cualquier orden de pago bajo este perjuicio reclamado, veamos:

*“(…) La valoración del daño moral subjetivo, por su carácter inmaterial o extra patrimonial, se ha confiado al discreto arbitrio de los falladores judiciales.* ***Esto, por sí, lejos de autorizar interpretaciones antojadizas, les impone el deber de actuar con prudencia, valiéndose de los elementos de convicción que obren en el plenario y atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la magnitud del daño.***

*Esta clase de daño, se ha dicho, "incide en la órbita de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, pues consiste en el pesar, en la aflicción que padece la víctima por el comportamiento doloso o culposo de otro sujeto, por cuanto sus efectos solamente se producen en la entraña o en el alma de quien lo padece, al margen de los resultados que puedan generarse en su mundo exterior, pues en éstos consistirían los perjuicios morales objetivados (…)”*[[8]](#footnote-8) *(subrayado y negrilla fuera del texto original)*

*“(…)* ***La reparación debe procurar una relativa satisfacción para no dejar incólume o impune la agresión; sin que represente una fuente de lucro injustificado que acabe desvirtuando la función asignada por la ley****. Es posible establecer su quantum, sostuvo recientemente la Sala, «en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador (…)”*[[9]](#footnote-9)

*“(…) Al juez, por tanto, le corresponde fijar el perjuicio extrapatrimonial,* ***pero las bases de su razonamiento no deben ser arbitrarias.*** *Se trata, sostuvo la Sala, «de una deducción cuya fuerza demostrativa entronca con clarísimas reglas o máximas de la experiencia de carácter antropológico y sociológico, reglas que permiten dar por sentado el afecto que los seres humanos, cualquiera sea su raza y condición social, experimentan por su padres, hijos, hermanos o cónyuge (…)”*[[10]](#footnote-10)

Así las cosas, con suficiencia se aprecia que la jurisprudencia ha sido clara no solo en establecer que se debe atender a la entidad del perjuicio, sino que se debe establecer las características que el juzgador debe valorar para que su decisión no se torne antojadiza, sino que por el contrario obedezca a procurar la indemnización en estricta atención a la aflicción ocasionada y no más allá de ella. Por tanto, corresponderá al *arbitrio iudicis* determinar el valor del daño moral, teniendo en cuenta los elementos probatorios que reposan en el expediente. Además, teniendo como parámetro y límite que en los casos más graves la jurisprudencia ha reconocido una indemnización hasta de $60.000.000 a la víctima directa. Por lo que es claro que la suma solicitada resulta claramente exorbitante en atención a los baremos indemnizatorios fijados en la jurisprudencia.

En conclusión, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte Demandante por cuanto, en primer lugar no está demostrada la responsabilidad civil de los demandados, aunado a que la tasación propuesta es equivocada y no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, por cuanto solo en los casos más graves con lesiones que comportan incluso la dependencia total de la víctima se ha reconocido la suma de $60.000.000, mientras que las pretensiones en el asunto de marras son de $95.408.120, es decir, un valor mucho más elevado que el máximo reconocido por la Corte Suprema de Justicia por concepto de daños morales. En consecuencia, la suma solicitada por los Demandantes resulta exorbitante y se encuentra por fuera de los lineamientos establecidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y en tal virtud la misma debe ser desestimada.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN

El extremo actor pretende que se condene al extremo pasivo de la litis al pago de los perjuicios extrapatrimoniales en la modalidad daño a la vida en relación. Sin embargo, es menester resaltar que es jurídicamente improcedente condenar a los demandados al pago de suma alguna a título de daño a la vida de relación, toda vez que la indemnización por este concepto no tiene ninguna viabilidad jurídica en el presente asunto. En primer lugar, debe resaltarse que el daño a la vida en relación es una tipología de perjuicios que ha sido desarrollada jurisprudencialmente en favor de la víctima directa del daño, en tanto que su naturaleza es justamente indemnizar a la víctima directa por los daños sufridos.

Pero además en los eventos en que la Corte Suprema de Justicia ha reconocido este emolumento se requiere una alta carga probatoria que la parte demandante no ha cumplido, en la medida en que no se evidencia tan siquiera la demostración de las lesiones sufridas por la señora Ilia María Romero Rosales, la gravedad y extensión de estas, así como tampoco se observa acreditación alguna de un cambio en las condiciones de vida, la imposición de cargas desproporcionadas o el cambio del proyecto de vida de los demandantes con ocasión al hecho lesivo, por ende, no se satisfacen los elementos de procedencia por lo que el despacho no podrá acceder a tal pedimento.

Lo anterior, ha sido reafirmado por la Corte Suprema de Justicia al indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que el impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. No obstante, el daño a la vida en relación sólo se le debe reconocer a la víctima directa. En otras palabras, el daño a la vida en relación sólo se debe reconocer a quien sufrió una alteración física o psíquica por el accidente, esto es, a la víctima directa. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia precisó:

“*(…) b) Daño a la vida de relación:* ***Este rubro se concede únicamente a la víctima directa*** *del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud,* ***que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales*** *(…)*”*21* (Subrayado y negrilla fuera del texto original).[[11]](#footnote-11)

De lo anterior se colige que la etiología de dicho perjuicio está estructurada para ser declarado únicamente en favor de la víctima directa. De modo que, cualquier otra reclamación en cabeza de persona distinta de la víctima directa del daño está llamada a fracasar. Así las cosas, en el caso concreto no se han probado los elementos que tornan procedente esta indemnización, frente a la víctima directa, pues ni siquiera están probada la gravedad o extensión de sus lesiones, las actividades de su vida cotidiana y placenteras que esta desarrollaba antes del hecho lesivo, y las que subsecuentemente dejó de desarrollar.

Por la postura expuesta, es necesario considerar que la parte demandante, pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no es procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de la existencia de lesiones debidamente acreditadas, con secuelas permanentes y pese a ello, en todo caso, el reconocimiento solicitado es superior a los casos de similares circunstancias al caso que nos ocupa, que en diferentes postulados la H. Corte Suprema ha reconocido.

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida de relación pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima, que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

*“(…) Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.*

*Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (…)”[[12]](#footnote-12)*

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar que la Sala Civil de esta alta corporación ordenó el pago de $ 30.000.000 a la víctima directa por los perjuicios ocasionados por la extracción de su ojo izquierdo. Obsérvese que, en aquel evento, la víctima sufrió graves secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiaran abruptamente tras los hechos que motivaron la demanda.

En el caso particular que nos cita al presente proceso, no se han establecido con claridad y de manera clara las lesiones sufridas por la señora Ilia María Romero Rosales, su extensión y su gravedad, y por ello no puede afirmarse o inferirse que esta haya tenido secuelas en su corporeidad que afecten directamente su estilo de vida, su relación con los demás o consigo misma, además, la parte actora realiza una desmesurada solicitud indemnizatoria que supera con creces el rubro reconocido en casos en donde se acreditaron incluso secuelas de gran envergadura.

Por otro lado, es manifiesto que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. No obstante, el daño a la vida en relación sólo se le debe reconocer a la víctima directa. En otras palabras, el daño a la vida en relación sólo se debe reconocer a quien sufrió una alteración física o psíquica por el accidente, esto es, a la víctima directa. Para el caso concreto, no existe ninguna prueba que acredite esta condición frente a la señora ILIA MARÍA ROMERO ROSALES.

Por lo anteriormente mencionado, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, no pueden ni deben ser indemnizados por mi representada el supuesto daño a la vida de relación que alega la demandante, ya que, su presunta causación no se encuentra debidamente probada en ninguna de las modalidades por perjuicio extrapatrimonial, porque no hay prueba suficiente más que los dichos de la demanda, sobre la presunta alteración en las actividades familiares, lúdicas, recreativas y productivas de la víctima directa del daño, tampoco se ha acreditado cuales actividades y la razón objetiva del impedimento de realizarlas, recordemos que la carga de la prueba para la parte demandante si pretende el reconocimiento del daño extrapatrimonial en modalidad de daño a la vida en relación les es aún más gravosa.. Por lo antes expuesto, resultan abiertamente indebida e injustificada la pretensión de la parte activa de la litis.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

.

## GENÉRICA O INNOMINADA

En atención al mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

# CAPÍTULO II

# CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR FLOTA MAGDALENA S.A. A AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

# FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

**FRENTE AL HECHO 2.1.:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el llamante en garantía, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por no estar relacionadas con el objeto del giro ordinario de sus negocios.

**FRENTE AL HECHO 2.2.:** A mi representada en calidad de compañía aseguradora no le consta de forma directa lo señalado por el llamante en garantía, toda vez que las circunstancias aludidas le son ajenas por no estar relacionadas con el objeto del giro ordinario de sus negocios.

**FRENTE AL HECHO 2.3:** Es cierto.

**FRENTE AL HECHO 2.4.:** Es cierto. Sin embargo, debe tenerse en consideración que en este hecho se hace mención a dos pólizas de naturalezas distintas, pues se trata de una póliza de responsabilidad civil extracontractual y una póliza de responsabilidad civil contractual; en ese entendido, y conforme a los hechos de la demanda, solo podría eventualmente afectarse en el presente asunto la última, es decir, la póliza de carácter contractual, pues, el conflicto materia del litigio tiene su origen en un contrato de transporte, en otras palabras, es un conflicto de carácter contractual, y no extracontractual.

**FRENTE AL HECHO 2.5.:** Es cierto.

**FRENTE AL HECHO 2.6.:**  No es un hecho, es una afirmación de la parte demandante la cual carece parcialmente de fundamento, en tanto que, en todo caso y en el eventual evento de una demanda que acceda a las pretensiones de la demanda, se deberá determinar que póliza de seguro resultaría afectada, de conformidad con las condiciones generales y particulares pactadas, así como con la legislación que regula el contrato de seguro, teniendo en cuenta los amparos contratados, el valor asegurado, exclusiones aplicables, etc.

**FRENTE AL HECHO 2.7.:** No es un hecho, es una afirmación de la parte demandante, la cual es parcialmente cierta, pues tal y como lo anuncia la parte demandante, la vinculación de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., se da en virtud de un contrato de seguro, luego entonces, la obligación de la compañía es condicional y está sujeta al cumplimiento de las condiciones particulares y generales pactadas, amparos contratados, coberturas, valor asegurado, exclusiones aplicables, deducible, etc.

**FRENTE AL HECHO 2.8,:** No es un hecho, es una afirmación de la parte actora que carece de fundamento jurídico, pues AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., tiene una obligación que es meramente condicional y en este caso la condición es que se haya materializado el riesgo asegurado, una vez constatado esto, y a fin de determinar si procede o no condena alguna en contra de mi representada, deberán revisar las condiciones generales y particulares de los seguros contratados.

# FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 1.1.:** No me opongo, en el entendido de que el H. Despacho ya profirió auto mediante el cual se aceptó la vinculación de mi representada como llamada en garantía por FLOTA MAGDALENA S.A., en el asunto de la referencia. Sin embargo, y en caso de una eventual condena, deberá el Despacho tener en consideración todas y cada una de las condiciones generales y particulares pactadas en los contratos de seguros en virtud de los cuales se expidieron las pólizas que se pretende afectar en el presente asunto.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 1.2.:** No me opongo, en el entendido de que, en efecto, entre mi mandante AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. y el llamante en garantía FLOTA MAGDALENA S.A., existe un vínculo contractual, y por tanto, cualquier obligación indemnizatoria que pueda surgir en este asunto en contra de mi mandante debe ser analizada precisamente en ese ámbito, y con plena observancia de todas y cada una de las condiciones generales y particulares pactadas de mutuo acuerdo y aceptadas por las partes.

**FRENTE A LA PRETENSIÓN 1.3.: ME OPONGO** a esta pretensión debido a que la misma no tiene vocación de prosperidad, por cuento según las pruebas aportadas al proceso no se dejó acreditado el nexo causal, pues no se ha demostrado que el accidente de tránsito haya ocurrido como consecuencia de las conductas desplegadas por la conductora del vehículo asegurado. Siendo así, no procede reclamación alguna con cargo a la póliza de seguro, puesto que no se han reunido los elementos esenciales para que sea procedente declarar la responsabilidad civil extracontractual y como consecuencia, no puede entenderse realizado el riesgo asegurado.

Aunado a ello, desde ya debe ponerse de presente que se encuentran configurado el fenómeno jurídico de la prescripción, tanto de las acciones derivadas del contrato de transporte que podía ejercer la tercera afectada ILIA MARÍA ROMERO ROSALES, como de las acciones derivadas del contrato de seguro que podía ejercer FLOTA MAGDALENA S.A., tales como el llamamiento en garantía, pues entre la fecha en que la tercera afectada le presentó la reclamación extrajudicial, y la fecha de formulación del llamamiento en garantía transcurrieron más de dos años.

# EXCEPCIONES DE MERITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

## PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO

Teniendo en cuenta que en el presente asunto (i) el accidente de tránsito acaeció el 05 de septiembre de 2014, (ii) el 25 de julio de 2017 se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial (iii) el 02 de octubre de 2017 se expidió la constancia de no acuerdo y (iv) la demanda se radicó el 23 de agosto de 2022, con posterioridad al término bienal establecido en el artículo 1081 y en el artículo 1131 del Código de Comercio, resulta claro que operó el fenómeno prescriptivo.

Sobre el particular, el Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Dicho precepto establece lo siguiente:

**“** *(…) ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES>. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

*La prescripción ordinaria* ***será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.***

*La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes(…)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

Por otro lado, en lo atinente a los seguros de responsabilidad, para evaluar la prescripción derivada del contrato de seguro es necesario analizar el artículo 1131 del Código de Comercio que establece:

*“(…) ARTÍCULO 1131. OCURRENCIA DEL SINIESTRO.* ***En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que*** *acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctim****a****.* ***Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial*** *(…)”* (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así, deberá en los seguros de responsabilidad entenderse ocurrido el siniestro para el asegurado, desde el momento en el que la víctima de los hechos le formula la petición judicial o extrajudicial:

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que el accidente de tránsito señalado por la parte Demandante y por el cual fue vinculada mi representada ocurrió el 05 de septiembre de 2014, según lo afirmado por la activa de la acción, y que así mismo, la constancia de no conciliación se expidió el día 02 de octubre de 2017, en la cual se dejó anotado que a pesar de haber sido notificada, FLOTA MAGDALENA S.A., no compareció a la diligencia. Ahora bien, teniendo en cuenta la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro opera dentro de los dos años siguientes a la reclamación judicial o extrajudicial, no hay lugar a dudas que la acción se encuentra totalmente prescrita. Lo anterior, por cuanto la demanda formulada por la parte actora fue instaurada hasta el 23 de agosto de 2022 y que por tanto el llamamiento en garantía se formuló en fecha posterior..Es decir, más de dos años luego de la ocurrencia del siniestro para el asegurado, esto es, la reclamación extrajudicial, por lo cual es evidente que en el presente caso operó la prescripción, máxime en consideración que la constancia de no acuerdo se expidió el 02 de octubre de 2017, por lo que, el término de dos (2) años para que prescribieran las acciones derivadas del contrato de seguro en este asunto empezó a correr a partir del 03 de octubre de 2017 y hasta el 03 de octubre de 2019.

De modo tal que como en el caso que nos ocupa transcurrido más de dos años desde la ocurrencia del siniestro para el asegurado, esto es, la reclamación extrajudicial de la víctima de los hechos,es evidente que en este caso operó la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, por cuanto el llamamiento en garantía no fue promovido dentro de los términos contemplados en los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio. En tal sentido, no existiría duda alguna que ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro que se encuentra en cabeza del llamante en garantía en los términos de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio. Por cuanto es claro que el término prescriptivo feneció con creces, al haber transcurrido más de dos años desde la configuración del siniestro y hasta el llamamiento en garantía.

En conclusión, al haber operado en el presente caso el fenómeno prescriptivo de que tratan los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio. Por cuanto han transcurrido más de dos años entre la fecha del siniestro, es decir, desde el 02 de octubre de 2017 y la fecha de presentación del llamamiento en garantía. No existiría duda alguna que ha operado la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro que se encuentra en cabeza del asegurado FLOTA MAGDALENA S.A., en los términos de los artículos 1081 y 1131 del Código de Comercio. Lo anterior, por cuanto es claro que el término prescriptivo feneció con creces.

En tal virtud, solicito al Despacho tener por probada esta excepción por encontrarse plenamente probada la prescripción.

1. **INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., POR FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL RIESGO ASEGURADO.**

Sin perjuicio de las excepciones planteadas en la contestación de la demanda, se formula la presente de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil RCC Transporte Servicio Público Pasajeros No.8001061071 Toda vez que de la mera lectura de la póliza podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. Mediante la póliza de Responsabilidad Civil RCC Transporte Servicio Público vinculada al presente litigio, la aseguradora indemnizará la incapacidad permanente o temporal que se genere a un pasajero del vehículo asegurado, pese a ello, que este riesgo efectivamente se ha materializado, pues en primera medida con la demanda y con el llamamiento en garantía no se allegan medios de prueba que den cuenta si quiera de la verdadera ocurrencia del accidente de tránsito. De igual manera, tampoco se observan medio de prueba que acrediten que la demanda ILIA MARÍA ROMERO ROSALES sufrió una incapacidad permanente o temporal como consecuencia del hecho de tránsito que presuntamente habría ocurrido el día 05 de septiembre de 2024.

Es necesario señalar que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado en su jurisprudencia que para que exista la obligación de indemnizar por parte de la compañía aseguradora, derivada del contrato de seguro, es requisito *sine qua non* la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo establecido en el artículo 1072 del Código de Comercio. Al respecto tal Corporación ha señalado que si bien, el hecho condicional y el evento dañino, prima facie, suelen surgir simultáneos, suficiente para confundirlos, lo cierto es, para generar responsabilidad, al margen de los tiempos, ambos deben aparecer concurrentes en una misma o en diferente época. De tal suerte, hasta tanto no acaezca el riesgo, es meramente una condición suspensiva (artículo 1536 del Código Civil), que se halla en estado latente, virtual o potencial a la espera de que el acontecimiento futuro incierto acontezca o no (artículo 1530, Ibidem).

Realizado el riesgo por el cumplimiento de la condición (artículo 1072 del Código de Comercio), nace la obligación del asegurador, por haberse configurado el siniestro, de tal suerte, la configuración del siniestro es justamente el acaecimiento de la condición. En otras palabras la ocurrencia del riesgo asegurado es justamente lo que se denomina siniestro y por ende, corresponderá primero que se verifique ese siniestro para poder pensar si quiera en el análisis de la existencia de obligación indemnizatoria, pues para el caso de marras el riesgo lo constituye la incapacidad permanente o temporal de la ocupante del vehículo de placas UFU-375,evento que no ha sucedido, tal como se dejó en evidencia, en el plenario no obran pruebas útiles para afirmar que la señora ILIA MARÍA ROMERO ROSALES tuvo alguna incapacidad bien fuera temporal o permanente, a causa del accidente de tránsito ocurrido el 05 de septiembre de 2014.

Aunado a lo anterior, en este caso encontramos que la responsabilidad imputable al asegurado no se ha estructurado, pues no existe nexo causal entre la conducta del conductor del vehículo de servicio público de placas UFU-375, y la ocurrencia del accidente, por el contrario, existe una gran incertidumbre en el presente asunto sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presentó el hecho de tránsito.

En conclusión, es claro que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, toda vez que tal como se dijo anteriormente nos encontramos ante una situación en la que no existe prueba del nexo causal, pues no se ha demostrado que el daño alegado se produjo como consecuencia de las acciones u omisiones del asegurado. Como consecuencia, no ha nacido la obligación condicional por parte de la Aseguradora, pues para que aquella pueda surgir a la vida jurídica necesariamente se requiere probar la existencia del siniestro que en este caso se traduce en la imperiosa necesidad de acreditar que el accidente de tránsito objeto de estudio fue provocado por el actuar del conductor del vehículo de servicio público de placas UFU-375, pero como aquello no se ha probado no es posible hablar de siniestro ni de la existencia de obligación indemnizatoria a cargo de Axa Colpatria Seguros S.A..

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

1. **FALTA DE COBERTURA TEMPORAL Y MATERIAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL RCE TRANSPORTE SERVICIO PÚBLICO PASAJEROS No. 8001431547.**

Ahora bien, sin perjuicio de las excepciones anteriormente planteadas, y teniendo en cuenta que en el presente asunto se pretende vincular una póliza de responsabilidad civil extracontractual, la No. 8001431547, es importante decir que conforme los hechos de la demanda, esta no presta cobertura para los hechos materia de litigio, en tanto que, los mismos no son objeto de cobertura material y temporal por la póliza en mención, y se explica:

En las condiciones generales de la póliza antes mencionada, en su capítulo I se explican los amparos y exclusiones; allí se da cuenta que con base en el artículo 4º de la Ley 389 de 1997, la Responsabilidad Civil Extracontractual amparada en la póliza se refiere a hechos acaecidos durante la vigente del seguro, siempre y cuando la reclamación del damnificado al asegurado o a Colpatria se efectúe dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia; circunstancias que no se cumple en el presente asunto, pues los hechos materia de litigo ocurrieron según se narra en la demanda el 05 de septiembre del año 2014 y la reclamación extrajudicial, en forma de solicitud de conciliación extrajudicial, fue puesta en conocimiento del asegurado FLOTA MAGDALENA S.A., después del 25 de julio de 2017, es decir, más de dos (2) años después de ocurrido el accidente que daría origen a la responsabilidad del asegurado.

Sin embargo, es aquí, donde entra en juego el tema de la cobertura material, pues, en el mismo acápite de las condiciones generales antes referenciado, al definir el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual, claramente se explica que, con este Axa Colpatria Seguros S.A., se compromete al resarcimiento de los perjuicios materiales y morales descritos en la póliza causados a **terceros** por los cuales el asegurado sea civilmente responsable con ocasión de un accidente de tránsito.

En este sentido, la expresión clave no es otra más que “terceros”, en tanto que, lo que se ampara es la responsabilidad de FLOTA MAGDALENA S.A., frente a estos que se derive de un accidente de tránsito, sin embargo, al tenor de los hechos narrados en la demanda, la señora ILIA MARÍA ROMERO ROSALES, no es una tercera, sino que, se trataría de un pasajera del bus de servicio público de placas UFU-375; en otras palabras, se trataría de alguien con quien FLOTA MAGDALENA S.A., tenía una relación contractual, y por tanto directa.

Así las cosas, en primera medida, la póliza de responsabilidad civil extracontractual transporte servicio publico pasajeros No. 8001431547, no prestaría cobertura material a los hechos mateira de litgio, pues se trataría de una responsabilidad derivada de un contrato de transporte, y no de una responsabilidad civil extracontractual, por otro lado, tampoco prestaría cobertura temporal, pues si bien es cierto, los hechos ocurrieron en vigencia de la póliza, la reclamación se presentó fuera del término de dos (2) años posteriores a la ocurrencia de los hechos, tal y como se encuentra previsto en el condicionado general de la póliza

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que se excluyen de amparo, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“*En efecto, no en vano los artículos 1056[[13]](#footnote-13) y 1120 del Código de Comercio, permiten al asegurador, con las restricciones legales, escoger los riesgos que a su arbitrio tenga a bien en amparar y estipular las exclusiones expresas de riesgos inherentes a dicha actividad.*

*Por lo demás, debe la empresa de seguros tener presentes que, en la delimitación del riesgo, no debe vaciar de contenido ese que asume pues tal postura conllevaría a un remedo de amparo sin traslación efectiva de riesgos, sucesos que originan pérdidas y, en suma, desembolsos económicos”.[[14]](#footnote-14)*

La misma Corte Suprema de Justicia en otro pronunciamiento definió la inexistencia de responsabilidad del asegurador cuando el riesgo se encuentra expresamente excluido, así:

*“Este principio de la universalidad que informa al seguro de transporte, entre otros más, justifica las precisas diferencias que, en lo pertinente, existen con las demás clases de seguros.* ***Así, por vía de ejemplo, en lo tocante con la delimitación del riesgo****, mientras el artículo 1056 del Código de Comercio permite que el asegurador, a su arbitrio, asuma “todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”, el art. 1120 ib. preceptúa que el seguro de transporte “comprende todos los riesgos inherentes al transporte, salvo el deterioro por el simple transcurso del tiempo y los riesgos expresamente excluidos” (Se subraya), luego,* ***en este último negocio aseguraticio, el asegurador es responsable cuando la pérdida sea ocasionada por uno de los “riesgos inherentes al transporte”, salvo que el riesgo se encuentre expresa e inequívocamente excluido por las partes****”[[15]](#footnote-15)* – (Subrayado y negrilla por fuera de texto.

Bajo esa misma interpretativa, la Corte Suprema de Justicia mediante en Sentencia del 13 de diciembre de 2018, indicó que las exclusiones de tipo convencional estipuladas en los contratos de seguro no comprometen la responsabilidad del asegurador, en virtud de la facultad prevista en el artículo 1056 del Código de Comercio:

*“Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como aquellas pactadas por las partes o, cuando menos,* ***en las que existe consentimiento respecto de las indicadas en el clausulado prestablecido, en los denominados acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no comprometen la responsabilidad del asegurador****.*

*Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de, «a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”[[16]](#footnote-16)* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

Así las cosas, según la jurisprudencia previamente expuesta, se evidencia como se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los Contratos de Seguro. Razón por la cual, es necesario señalar que en la Póliza Seguro de Automóviles No. 497218, emitida por Liberty Seguros S.A. en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones respecto del amparo de responsabilidad civil extracontractual de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones contempladas en el clausulado general de la Póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza de Liberty Seguros S.A., por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación del Contrato de Seguro, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones respecto a mi mandante.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

1. **INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Y EL LLAMANTE EN GARANTÍA**

Esta excepción se propone con fundamento en que la solidaridad surge exclusivamente cuando la Ley o la convención la establecen. En el caso que nos ocupa, la fuente de las obligaciones de mi procurada está contenida en el contrato de seguro y en él no está convenida la solidaridad entre las partes del contrato.

La H. Corte Suprema de Justicia[[17]](#footnote-17) ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes la Corte[[18]](#footnote-18) igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…)* ***La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.*** *De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y* ***si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización****. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y sublínea fuera de texto).*

En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes.

Debe aclararse que las obligaciones de la aseguradora que represento están determinadas por el límite asegurado para cada amparo, por las condiciones del contrato de seguro y por la normatividad que lo rige. Por lo tanto, la obligación indemnizatoria que remotamente podría surgir a su cargo está estrictamente sujeta a las estipulaciones contractuales y al límite asegurado para el amparo de muerte o lesión a una persona, con sujeción a las condiciones de la póliza.

Solicito señor juez declare probada la presente excepción.

1. **SUJECIÓN A LAS CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL CONTRATO DE SEGURO, EL CLAUSULADO Y LOS AMPAROS.**

Es preciso señalar que de acuerdo con lo contemplado en el artículo 1044 del Código de Comercio, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., podrá proponer a los beneficiarios, la excepciones que pueda alegar en contra del tomador y el asegurado cuando son personas distintas, por tanto, en caso de un fallo en contra este deberá ajustarse de acuerdo con las condiciones pactadas dentro del contrato de seguro, y dicha condena no podrá exceder los parámetros acordados por los contratantes.

Por lo tanto, en caso de que prosperen las pretensiones de responsabilidad civil de los demandantes contra los demandados, tal relación deberá estar de acuerdo con el contrato de seguro denominado Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil R.C.C. Trans servicio público pasajeros, pues de conformidad con los hechos de la demanda, esta sería la única póliza que eventualmente prestaría cobertura material a los hechos materia de litigio.

## CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS.

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo, de modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado.

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

*“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”*

En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

*“****Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento****. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

A su vez, el artículo 1127 ibidem, dispone lo siguiente:

*“El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador* ***la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley*** *y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.*

*Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.”* - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

Debe recordarse que tal como se expuso en el capítulo de contestación de la demanda, y sin que signifique aceptación de responsabilidad alguna, los perjuicios alegados por la parte demandante por concepto de daño moral, daño a la vida de relación y lucro cesante, en primer lugar, carecen de fundamento probatorio y fáctico. Aunado a lo anterior, la tasación efectuada por la parte demandante por todos y cada uno de estos rubros es exorbitante.

En lo que atañe al daño moral, la parte demandante reclama el reconocimiento de unas cifras que sobrepasan con creces los montos y topes que por este concepto ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia en casos similares, o incluso de mayor gravedad. De otro lado, téngase en cuenta que el daño a la vida de relación también es tazado en cifras irrazonables y desproporcionadas. Además de que tal perjuicio no se encuentra acreditado.

Finalmente, con el lucro cesante solicitado, la parte demandante se queda absolutamente corta al no acreditar ni la actividad económica o laboral que alega desempeñaba la víctima de los hechos, ni los ingresos que dejó de percibir a causa del accidente. Téngase en cuenta que la parte demandante ni siquiera en el fundamento estimatorio explica de manera objetiva el cómo llegó a la cifra solicitada, o bajo que concepto o razonamientos.

En el caso de marras no es viable el reconocimiento y pago de suma alguna, por cuanto no está demostrada la ocurrencia del riesgo amparado, responsabilidad civil contractual por incapacidad permanente o temporal de pasajero del vehículo de placas UFU-375. Razón por la cual, de pagar suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro, y eventualmente enriqueciendo a la parte demandante.

En conclusión, como no existe ninguna certeza de los perjuicios pretendidos y mucho menos de que los mismos hubieren sido causados por el asegurado, reconocerlos con cargo a la póliza transgrediría en mayor medida el carácter indemnizatorio del contrato de seguro, por lo tanto, deberá el Despacho evitar exactamente la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y así evitar un enriquecimiento sin justa causa en beneficio de la parte actora.

## EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL R.C.C. TRANSPORTE SERVICIO PÚBLICO PASAJEROS NO. 8001061071.

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil R.C.C. Transporte Servicio Público pasajeros No. 8001061071, que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de Axa Colpatria Seguros S.A. Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

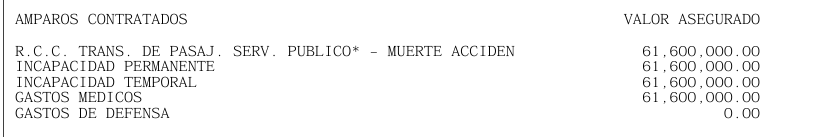
En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

*“****ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA****. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación,* ***el valor de la prestación a cargo de la aseguradora****, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños,* ***se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado****, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)”[[19]](#footnote-19)* (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante en lo que respecta al amparo contratado que se podría afectar en el asunto de la referencia, y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora corresponde a la suma asegurada individual indicado en la carátula de la Póliza, así:



Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis Axa Colpatria Seguros S.A. no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la Póliza. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho, declarar probada la presente excepción.

## LA PÓLIZA EN EXCESO OPERA AGOTADO EL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL R.C.C. TRANSPORTE SERVICIO PÚBLICO PASAJEROS NO. 8001061071.

Ahora bien, sin perjuicio de ninguna de las excepciones pactadas anteriormente, se plantea la presente excepción por medio de la cual se explica que la póliza en exceso que el llamante en garantía FLOTA MAGDALENA S.A., pretende sea vinculada y afectada en el presente asunto, solo opera en el caso de que se agote el valor asegurado en la póliza de seguro de responsabilidad civil R.C.C. transporte servicio público pasajeros no. 8001061071.

Esta situación puede inferir incluso desde el mismo nombre de la póliza, pues allí se indica que se trata de una póliza en exceso, que solo opera en exceso de la mencionada póliza de seguro de responsabilidad civil R.C.C. transporte servicio público pasajeros no. 8001061071.

En este sentido, la obligación a cargo de mi procurada sólo surge cuando se comprueba de manera fehaciente, en primer lugar, que se estructuró la responsabilidad civil que se pretende atribuir a los demandados, en segundo lugar, que los hechos hubieran ocurrido dentro de la vigencia de la póliza y, en tercer lugar, que no se configure ninguna causal de inoperancia del contrato de seguros. Sólo de llegarse a cumplir cada uno de los requisitos expuesto, se pondría a predicar la realización del riesgo asegurado. En conclusión, la póliza en exceso, opera sólo en exceso de la póliza de seguro de responsabilidad civil R.C.C. transporte servicio público pasajeros no. 8001061071, de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la póliza primaria póliza de seguro de responsabilidad civil R.C.C. transporte servicio público pasajeros no. 8001061071.

Solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

## RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL R.C.C. TRANSPORTE SERVICIO PÚBLICO PASAJEROS NO. 8001061071

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro vinculada al proceso, en sus condiciones generales señalan una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. AA031299 pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

## GENÉRICA O INNOMINADA

Solicito a usted Señor Juez, decretar cualquier otra excepción de fondo que resulte probada en curso del proceso, y que pueda corroborar que no existe obligación alguna a cargo de mi procurada y que pueda configurar otra causal que la exima de toda obligación indemnizatoria, incluyendo la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro (artículo 1081 del Código de Comercio).

# CAPÍTULO III. PRUEBAS, ANEXOS Y NOTIFICACIONES

## PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LAS PRUEBAS DEL DEMANDANTE

* **Respecto del Informe Pericial de Clínica Forense emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Dirección Seccional de Pasto.**

Sin perjuicio de que está prueba se allegó al proceso como copia simple y no fue solicitada como tal como dictamen pericial en los términos del artículo 226 de C.G.P., el suscrito apoderado en uso del artículo 228 del mismo código, se permite solicitar al Despacho la citación a la audiencia de practica de pruebas de la siguiente persona:

* LILIANA CRISTINA HIDALGO BRAVO- profesional universitario forense

Lo anterior, por haber sido está quien suscribió el mencionado informe pericial de clínica forense, con el fin de que comparezca a la audiencia y se permita a las partes ejercer el derecho de contradicción sobre el mencionado dictamen, amen de que, en principio este se tiene en el proceso únicamente como prueba documental y no como prueba pericial.

## MEDIOS DE PRUEBA

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

## DOCUMENTALES

* 1. Póliza Seguro de Responsabilidad Civil R.C.C. Transporte Servicio Público de Pasajeros No. 8001061071
  2. Condicionado general aplicables a la póliza Seguro de Responsabilidad Civil R.C.C. Transporte Servicio Público de Pasajeros No. 8001061071
  3. Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil R.C.E. Transporte Servicio Público Pasajeros No. 8001431547.
  4. Condicionado general aplicable a la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil R.C.E. Transporte Servicio Público Pasajeros No. 8001431547.
  5. Póliza en exceso

## INTERROGATORIO DE PARTE

* 1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a las siguientes personas:
     1. **ILIA MARÍA ROMERO ROSALES,** identificada con Cédula de ciudadanía No. 59.822.128

Para que, en su calidad de Demandante, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandantes podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en la demanda.

* 1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al representante legal de FLOTA MAGDALENA S.A.**,** en su calidad de demandado y llamante en garantía, a fin de que conteste el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, del llamamiento, las contestaciones, y en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. El representante legal de **FLOTA MAGDALENA S.A.** podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en su contestación.

## DECLARACIÓN DE PARTE

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del representante legal de **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de Póliza Seguro de Responsabilidad Civil R.C.C. Transporte Servicio Público Pasajeros No. 8001061071, así como la forma de operación y cobertura de la póliza en excesos vinculada en el presente litigio.

## TESTIMONIALES

Solicito se sirva citar a la doctora **DARLYN MARCELA MUÑOZ**, identificada con la cédula de ciudadanía 1.061.751.492 de Popayán, asesora externa de mi representada con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, así como de los fundamentos de derecho y de la Póliza de Seguro. Este testimonio se solicita igualmente para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la Póliza de Automóviles, sus exclusiones, y en general, sobre las excepciones propuestas frente a la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las características, condiciones, vigencia, coberturas, exclusiones, etc., del Contrato de Seguro objeto del presente litigio. La doctora Muñoz podrá ser citada en la Carrera 2 Bis No. 4-16 de la ciudad de Popayán, o en la dirección electrónica: [darlingmarcela1@gmail.com](mailto:darlingmarcela1@gmail.com).

## DICTAMEN PERICIAL

En los términos del artículo 227 del Código General del Proceso anuncio que me valdré de dictamen pericial que versa sobre la reconstrucción del accidente de tránsito ocurrido 05 de septiembre de 2014, en el que se vio involucrado el vehículo de placas UFU-375 conducido por el señor CARLOS ARTURO CHAPARRO CHAPARRO y al servicio de FLOTA MAGDALENA S.A.

La prueba pericial enunciada es conducente, pertinente y útil por cuanto es funcional para verificar desde un punto de vista técnico, los hechos acaecidos el 05 de septiembre de 2024, donde se vio involucrado el automotor antes referido, para que desde un criterio técnico se pueda reconstruir fielmente las situaciones e hipótesis que rodearon el accidente de tránsito el cual es objeto del litigio, además de efectuar un análisis respecto a la velocidad del automotor y el factor de evitabilidad. Estos aspectos resultan de gran relevancia para que el juzgador llegue al real convencimiento sobre aquello que en efecto sucedió.

Se anuncia esta prueba en los términos indicados comoquiera que el termino de traslado de la demanda es insuficiente para aportar un dictamen de esta naturaleza debido a la complejidad que ello demanda por parte del perito en tanto se debe realizar inspección al lugar de los hechos, hacer mediciones y delimitar la topografía de la zona, realizar análisis de os vehículos o características de aquellos y realizar una serie de ecuaciones matemáticas que permitan la reconstrucción de los hechos. Por lo tanto, solicitamos como término para aportar el dictamen veinte (20) días hábiles.

## ANEXOS

1. Pruebas relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Poder Especial conferido al suscrito apoderado.
3. Certificado de existencia y representación legal de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

## NOTIFICACIONES

* La parte actora en la dirección relacionada en el libelo demandatorio.
* Los llamantes en la dirección relacionada en el llamamiento en garantía.
* Mi representada en la Carrera 9 #24-38, Local 20202 Mezanine, Bogotá D.C.

**Correo electrónico:** [notificacionesjudiciales@axacolpatria.co](mailto:notificacionesjudiciales@axacolpatria.co)

* El suscrito en la secretaria de su Despacho o en la Avenida 6 A Bis No. 35 N – 100, Oficina 212, de la ciudad de Cali.

**Correo electrónico:** [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Atentamente,

Diagrama

Descripción generada automáticamente con confianza media

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**

C.C. Nº 19.395.114 de Bogotá

T.P. N° 39.116 del C. S. de la J.

1. Ballesteros J. (2012). Responsabilidad Civil. Parte General Tomo I. Temis. Bogotá Págs. 417 – 418. [↑](#footnote-ref-1)
2. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-2)
3. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque. [↑](#footnote-ref-3)
4. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002-188. M. P. Ariel Salazar Ramírez. [↑](#footnote-ref-4)
5. Corte Suprema de Justicia. Sentencia Radicado 2000-01141 de 24 de junio de 2008. [↑](#footnote-ref-5)
6. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC5885-2016, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. Citada en Compendio el daño extrapatrimonial y su cuantificación [↑](#footnote-ref-6)
7. Corte Suprema de Justicia, Sentencia SC780-2020, M.P. Ariel Salazar Ramirez. [↑](#footnote-ref-7)
8. Corte Suprema de Justicia, sentencia SC4703-2021, Radicación: 11001-31-03-037-2001-01048-0l, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona. [↑](#footnote-ref-8)
9. CSJ CS de 18 de septiembre de 2009, exp. 2005-00406-01. Cfr. se665 de 7 de marzo de 2019, exp.2009-00005-01. [↑](#footnote-ref-9)
10. CSJ SC de 5 de mayo de 1999, exp. 4978. [↑](#footnote-ref-10)
11. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC5340-2018 de 7 de diciembre de 2018. Magistrado Ponente: Arnoldo Wilson Quiroz Monsalvo. [↑](#footnote-ref-11)
12. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado11001-3103-006-1997-09327-01. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dice el precepto: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”. [↑](#footnote-ref-13)
14. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC4527-2020. M.P. Francisco Ternera Barrios. [↑](#footnote-ref-14)
15. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 2007. Exp. 2000-5492-01. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo. [↑](#footnote-ref-15)
16. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5327-2018. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rico Puerta. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibídem. [↑](#footnote-ref-18)
19. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952. [↑](#footnote-ref-19)